



# Asamblea General

Distr. general  
9 de marzo de 2012  
Español  
Original: inglés

---

## Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal

13º período de sesiones

Ginebra, 21 de mayo a 4 de junio de 2012

## Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos

### Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte\*

El presente informe constituye un resumen de 75 comunicaciones de interlocutores<sup>1</sup> para el examen periódico universal. El informe sigue la estructura de las directrices generales aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos en su decisión 17/119. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. De conformidad con la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, cuando procede, se incluye una sección separada para las contribuciones de la institución nacional de derechos humanos del Estado examinado acreditada en plena conformidad con los Principios de París. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. El informe se ha preparado teniendo en cuenta la periodicidad del examen y los acontecimientos ocurridos durante ese período.

---

\* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

## **I. Información proporcionada por las instituciones nacionales de derechos humanos del Estado examinado acreditadas en plena conformidad con los Principios de París**

### **Antecedentes y marco**

1. La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC)<sup>2</sup> se remitió a las recomendaciones 12<sup>3</sup>, 15<sup>4</sup>, 21<sup>5</sup>, 22<sup>6</sup>, 23<sup>7</sup>, 24<sup>8</sup> y 26<sup>9</sup> y señaló que el Reino Unido debía, entre otras cosas: a) retirar su declaración interpretativa<sup>10</sup> respecto del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, su declaración interpretativa<sup>11</sup> respecto de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y sus reservas a los artículos 12, párrafo 4, 24 a) y b) y 27 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad; b) ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares<sup>12</sup>; y c) formular las declaraciones requeridas en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y el artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial<sup>13</sup>.

2. La NIHRC se remitió a la recomendación 19<sup>14</sup> y dijo que aún no se había aprobado una declaración de derechos y garantías fundamentales para Irlanda del Norte<sup>15</sup>.

3. La Comisión de Derechos Humanos de Escocia (SHRC) dijo que la iniciativa del Gobierno de Escocia de obligar a sus ministros a tener "debidamente en cuenta" la Convención sobre los Derechos del Niño debía hacerse extensiva a otros tratados internacionales de derechos humanos, pero no servir de alternativa a la incorporación de esos instrumentos<sup>16</sup>. La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos (EHRC)<sup>17</sup> dijo que el Gobierno de Gales había introducido una legislación similar y recomendó que se hiciera lo propio en Inglaterra<sup>18</sup>.

4. La EHRC expresó su preocupación por las desigualdades en el disfrute del derecho a la salud, la educación y el empleo<sup>19</sup>.

5. La SHRC dijo que su presupuesto había sido recortado y recomendó que el Parlamento de Escocia le proporcionara fondos suficientes para desempeñar su mandato de conformidad con los Principios de París<sup>20</sup>.

6. La NIHRC se remitió, entre otras, a la recomendación 13<sup>21</sup> y pidió que se elaborara un programa nacional para combatir el hacinamiento en las cárceles, se adoptaran medidas en ese sentido<sup>22</sup> y se aprobara una estrategia relativa a los presos extranjeros<sup>23</sup>. La NIHRC dijo que en Irlanda del Norte no había ninguna cárcel para mujeres ni servicios penitenciarios apropiados para ellas<sup>24</sup>.

7. La EHRC dijo que las investigaciones sobre las denuncias de tortura en el Iraq, incluida la relativa a Baha Mousa, no satisfacían las condiciones de una investigación pública completa<sup>25</sup>. La Comisión de Investigación sobre el trato a los Detenidos que examinaría las denuncias de complicidad en actos de tortura cometidos en el extranjero debía cumplir con las normas internacionales<sup>26</sup>.

8. La EHRC expresó su preocupación por que la Ley de derechos humanos no otorgaba la misma protección a los ancianos que recibían atención médica y social a domicilio de proveedores privados que a aquellos que recibían atención de organismos públicos<sup>27</sup>.
9. La EHRC dijo que las actuales propuestas de reforma de la asistencia jurídica no debían limitar indebidamente la asistencia jurídica en las causas civiles, ya que ello afectaría al acceso a la justicia de los más vulnerables<sup>28</sup>.
10. En relación con la libertad de asociación y de reunión pacífica, la EHRC recomendó que se restringiera el uso del "kettling" (acordonamiento de manifestantes por la policía), la vigilancia abierta o encubierta de los manifestantes, las medidas preventivas y las órdenes de prohibición<sup>29</sup>.
11. La EHRC expresó su preocupación por el lento avance en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y recomendó que se aprobaran políticas gubernamentales y disposiciones jurídicas para alentar las prácticas de igualdad de remuneración<sup>30</sup>.
12. La EHRC dijo que las reformas del sistema de bienestar propuestas podían tener consecuencias desfavorables para las personas vulnerables, especialmente las personas con discapacidad<sup>31</sup>.
13. La SHRC dijo que el reciente desalojo forzado de Dale Farm, en Inglaterra, era un ejemplo de que no se adoptaban estrategias basadas en los derechos humanos para conciliar los derechos de las comunidades gitanas o nómadas con los de las comunidades asentadas<sup>32</sup>.
14. La EHRC expresó su preocupación, entre otras cosas, por la falta de protección de los trabajadores domésticos migratorios<sup>33</sup>.
15. La NIHRC se remitió a las recomendaciones 9<sup>34</sup> y 15<sup>35</sup> y recomendó que el Reino Unido pusiera en práctica las frases primera y segunda del Programa Mundial para la educación en derechos humanos<sup>36</sup> y que el Gobierno de Irlanda del Norte diera prioridad a la formación en derechos humanos en las escuelas y en la administración pública<sup>37</sup>.
16. La NIHRC se remitió a la recomendación 12<sup>38</sup> y recomendó que se investigaran las muertes ocurridas durante el conflicto en Irlanda del Norte<sup>39</sup>.
17. La NIHRC se remitió a las recomendaciones 6<sup>40</sup> y 9<sup>41</sup> y expresó su preocupación por que el proyecto de ley de prevención del terrorismo y de medidas de investigación conservara el uso de "audiencias privadas" con el procedimiento del "defensor especial"<sup>42</sup>.
18. La NIHRC se refirió a las recomendaciones 2<sup>43</sup>, 7<sup>44</sup> y 9<sup>45</sup> y dijo que la aplicación excesiva de la prisión preventiva a niños en Irlanda del Norte demostraba que la Convención sobre los Derechos del Niño no se aplicaba plenamente<sup>46</sup>.
19. La SHRC dijo que las prisiones de Escocia seguían albergando a más reclusos de los permitidos y que existían preocupaciones sobre, entre otras cosas, el número cada vez más desproporcionado de reclusas<sup>47</sup>.
20. La NIHRC se refirió a las recomendaciones 2<sup>48</sup>, 9<sup>49</sup> y 25<sup>50</sup> y señaló que la actual edad de responsabilidad penal en todo el Reino Unido —10 años en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, y 12 años en Escocia— era demasiado baja<sup>51</sup>.
21. La NIHRC se refirió a la recomendación 16, la Ley de pobreza infantil de 2010 y la Estrategia de reducción de la pobreza infantil, y pidió al Reino Unido que explicara qué tenía previsto hacer para acabar con la pobreza infantil<sup>52</sup>.
22. La NIHRC se refirió a las recomendaciones 1<sup>53</sup>, 3<sup>54</sup>, 4<sup>55</sup> y 5<sup>56</sup> y dijo, entre otras cosas, que la prevalencia de la violencia doméstica y sexual seguía siendo alta en Irlanda del Norte<sup>57</sup>.

23. La NIHRC se refirió a la recomendación 15<sup>58</sup> y dijo que la Ley única de igualdad del Reino Unido no era aplicable a Irlanda del Norte y que aún no se había cumplido el compromiso asumido en el Acuerdo de St. Andrews de aprobar un proyecto de ley única de igualdad<sup>59</sup>.

24. La SHRC dijo que el Gobierno de Escocia se había comprometido a aplicar al cambio climático un enfoque basado en los derechos humanos y recomendó que se cumpliera ese compromiso<sup>60</sup>.

## II. Información proporcionada por otras partes interesadas

### A. Antecedentes y marco

#### 1. Alcance de las obligaciones internacionales<sup>61</sup>

25. La comunicación conjunta 10 (JS 10) hizo alusión a las recomendaciones 25<sup>62</sup> y 26<sup>63</sup> y señaló que el Reino Unido había retirado sus reservas a la Convención sobre los Derechos del Niño relativas a la inmigración y la ciudadanía, y había ratificado el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad<sup>64</sup>.

26. Save the Children (SC) dijo que el Reino Unido no había retirado su reserva al Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía<sup>65</sup>.

27. Child Soldiers International (CSI) dijo que el Reino Unido consideraba que la declaración que había formulado al ratificar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados era una "declaración interpretativa", y no una reserva. Como la declaración limitaba el efecto jurídico del Protocolo, era equivalente a una reserva<sup>66</sup>.

28. La JS 9 alentó al Reino Unido a retirar las cuatro reservas y la declaración interpretativa que había formulado al ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad<sup>67</sup>.

29. La JS 6 dijo que el Reino Unido no había cumplido con sus obligaciones internacionales dimanantes de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que no había hecho extensiva a Irlanda del Norte la legislación sobre el aborto introducida en Inglaterra, Escocia y Gales en 1967<sup>68</sup>.

30. Redress Trust (Redress) dijo que el Reino Unido no había aceptado el derecho de queja previsto en la Convención contra la Tortura ni había ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte<sup>69</sup>.

31. La Children's Rights Alliance for England (CRAE)<sup>70</sup> pidió que el Reino Unido aceptara el derecho de queja en relación con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas<sup>71</sup> y la Convención contra la Tortura<sup>72</sup>.

32. La JS 13 pidió que el Reino Unido ratificara la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>73</sup>.

33. La JS 12 dijo que las actuaciones de la policía permitidas por el artículo 60 de la Ley de justicia penal y orden público de 1994<sup>74</sup> eran contrarias a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>75</sup>.

34. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI-CoE) instó al Reino Unido a que firmara y ratificara el Protocolo N° 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos<sup>76</sup>.

## 2. Marco constitucional y legislativo

35. La JS 8 y la JS 10 dijeron que ninguno de los tratados de derechos humanos ratificados por el Reino Unido había sido incorporado a la legislación interna<sup>77</sup>, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>78</sup>. La JS 9 dijo que el hecho de que no se hubiera incorporado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en la legislación interna limitaba la efectividad de los derechos de esas personas<sup>79</sup>.

36. La JS 8 dijo que, en Gales, la Medida sobre los derechos de los niños y jóvenes, aprobada en marzo de 2011, obligaba a los ministros a tener debidamente en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño en el ejercicio de cualquiera de sus funciones<sup>80</sup>. La JS 10 dijo que el proyecto de ley escocesa, similar a la medida galesa, no podía ser una alternativa a la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la legislación interna<sup>81</sup>.

37. Conscience and Peace Tax International (CPTI) recomendó que el Reino Unido consagrara en la legislación los procedimientos para la salida de las fuerzas armadas por motivos de objeción de conciencia<sup>82</sup>.

38. La JS 10, la JS 8, Amnistía Internacional (AI), Justice, Freedom from Torture (FT), JUST West Yorkshire (JWY) y la Law Society of England and Wales (LS) dijeron que el Gobierno del Reino Unido había creado una comisión para estudiar la creación de una "declaración de derechos y garantías fundamentales del Reino Unido". Esa comisión trabajaba "en un ambiente político"<sup>83</sup> que era "abiertamente hostil a los derechos humanos"<sup>84</sup>. En sus atribuciones no se hacía ninguna mención de la Ley de derechos humanos, aun cuando toda nueva declaración de derechos y garantías fundamentales debía basarse en la protección de los derechos humanos que proporcionaba actualmente dicha ley y reforzarla. La Ley de derechos humanos incluía un mecanismo para dividir las responsabilidades relativas a la protección efectiva de los derechos humanos entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, ahora existía un "plan político para redefinir esas responsabilidades con el fin de diluir el papel de los tribunales"<sup>85</sup>. En consecuencia, se expresó preocupación por la posible sustitución de la Ley de derechos humanos<sup>86</sup>. La LS recomendó que se mantuviera la Ley de derechos humanos, que no se eliminara ni diluyera ninguno de los derechos previstos en ella y que se le agregaran nuevos derechos<sup>87</sup>.

39. La JS 13 pidió al Reino Unido que garantizara la continuación y el reforzamiento de la Ley de derechos humanos durante su próxima revisión<sup>88</sup>.

40. La Oficina del Comisionado de la Infancia (OCC)<sup>89</sup> recomendó que, si se aprobaba una nueva declaración de derechos y garantías fundamentales, se incluyeran en ella derechos específicos de los niños<sup>90</sup>.

41. El Committee on the Administration of Justice (CAJ) y la JS 13 dijeron que el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo)<sup>91</sup> incluía una declaración de derechos y garantías

fundamentales para Irlanda del Norte<sup>92</sup>. British Irish Rights Watch (BIRW) dijo que Irlanda del Norte necesitaba una declaración de derechos y garantías fundamentales que reflejara sus circunstancias particulares<sup>93</sup>.

### **3. Infraestructura institucional y de derechos humanos y medidas de política**

42. SC pidió que los cuatro Comisionados de la Infancia cumplieran con los Principios de París<sup>94</sup>.

43. El Comisionado de la Infancia de Gales (CCW) pidió que se realizara una modificación legislativa para eliminar las funciones de la OCC en Gales, Irlanda del Norte y Escocia en las competencias no transferidas, lo que permitiría a cada uno de los Comisionados de la Infancia promover y proteger todos los derechos de los niños en sus territorios respectivos<sup>95</sup>.

44. La OCC dijo que el "proyecto de ley de los organismos públicos" que permitiría a los ministros modificar, entre otras cosas, las funciones de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos (EHRC) era incompatible con el carácter de institución nacional de derechos humanos independiente de la EHRC<sup>96</sup>.

45. La JS 8 dijo que seguía preocupada por, entre otras cosas, la falta de un enfoque estratégico del Gobierno de Gales en relación con los derechos del niño<sup>97</sup>.

46. AI dijo que el Reino Unido hacía una interpretación restrictiva de la aplicación extraterritorial de la protección de los derechos humanos en virtud del derecho internacional en relación con sus obligaciones de regular las actividades de las empresas británicas que operaban en el extranjero<sup>98</sup>.

47. El Institute for Human Rights Business (IHRB) dijo que el Reino Unido no requería el cumplimiento del criterio de realizar una evaluación del impacto ambiental y social a algunos proyectos que solicitaban la financiación del Departamento de Garantía de Crédito para las Exportaciones (ECGD)/ UK Export Finance (UKEF)<sup>99</sup>.

48. La JS 11 dijo que las actividades de un número significativo de empresas registradas en el Reino Unido que operaban en territorios indígenas de todo el mundo habían violado los derechos de los pueblos indígenas<sup>100</sup>.

## **B. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos**

### **Cooperación con los órganos de tratados<sup>101</sup>**

49. La JS 9 expresó preocupación por la demora del Reino Unido en la presentación de su informe inicial al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>102</sup>.

## **C. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable**

### **1. Igualdad y no discriminación**

50. La ECRI-CoE señaló que, aunque se habían hecho progresos para eliminar la discriminación, seguía habiendo desigualdades<sup>103</sup>.

51. La JS 13 dijo que algunos artículos de la Ley de igualdad de 2010 aún no habían entrado en vigor<sup>104</sup>. La JS 9 dijo que las disposiciones para lograr la igualdad de las personas con discapacidad eran insuficientes<sup>105</sup>.

52. EL CCW dijo que la Ley de igualdad no protegía a los niños contra la discriminación por razón de su edad<sup>106</sup>.

53. Abused Men in Scotland (AMIS) dijo que las instituciones de Escocia discriminaban a los hombres en relación con el acceso a sus hijos en casos como los de divorcio o separación<sup>107</sup>.

54. UKJCW dijo que el mercado de trabajo se caracterizaba por una persistente segregación ocupacional, arraigada en patrones de género en cuanto a la adquisición de competencias que se basaban en estereotipos sobre las aptitudes, las preferencias y las capacidades de las mujeres y las niñas<sup>108</sup>.

55. La JS 5 dijo que los dalit eran objeto de discriminación por razón de su casta en diversas esferas, entre ellas el empleo<sup>109</sup>. En una sesión de la Cámara de los Lores se había decidido modificar la Ley de igualdad para incluir la casta como un aspecto de la raza<sup>110</sup>.

56. La Organización de Defensa de las Víctimas de la Violencia (ODVV) dijo que la política de lucha contra el terrorismo alentaba a la sociedad a tratar a los musulmanes como objetos legítimos de abuso<sup>111</sup>.

## 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona

57. La JS 7 señaló que era poco probable que la Comisión de Investigación sobre el trato a los Detenidos que examinaría la presunta complicidad de los servicios de inteligencia en torturas cometidas en el extranjero actuara de conformidad con la legislación nacional e internacional pertinente<sup>112</sup>.

58. Redress señaló que las orientaciones<sup>113</sup> que se daban a los agentes de los servicios de inteligencia sobre la cooperación con servicios extranjeros de los que se sabía o se creía que cometían actos de tortura eran incompatibles con la Convención contra la Tortura<sup>114</sup>.

59. Redress dijo que el Reino Unido debía aceptar la aplicación extraterritorial de la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a los actos de su personal en el extranjero<sup>115</sup>, así como la obligación de enjuiciar o extraditar a los sospechosos de cometer actos de tortura que entraran en su jurisdicción<sup>116</sup>.

60. BIRW dijo que las balas de plástico utilizadas por la policía antidisturbios en Irlanda del Norte podían causar víctimas mortales<sup>117</sup>.

61. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, del Consejo de Europa (CPT-CoE), dijo que la política y las orientaciones aplicables al uso, en Inglaterra y Gales, de armas de descarga eléctrica (*tasers*) por la policía estaban redactadas en términos poco claros que abrían la puerta al uso indebido de dichas armas<sup>118</sup>.

62. AMIS dijo que la violencia doméstica era un problema considerable en Escocia<sup>119</sup> y que los hombres, cuando eran la víctima, eran marginados por las autoridades<sup>120</sup>.

63. La Iniciativa Global para Acabar con todo Castigo Corporal hacia niños y niñas (GIEACPC) se refirió a las recomendaciones 2<sup>121</sup>, 3<sup>122</sup>, 4<sup>123</sup> y 5<sup>124</sup> y dijo que desde el último examen<sup>125</sup> no había habido ningún cambio con respecto a la legalidad del castigo corporal de los niños en el Reino Unido<sup>126</sup>. El castigo corporal en el hogar seguía siendo legal<sup>127</sup>. El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (Comisario-CoE) dijo que las leyes no eran compatibles con las normas internacionales de derechos humanos<sup>128</sup>. La JS 8 dijo que infringía la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>129</sup>.

64. La GIEACPC dijo que el castigo corporal estaba prohibido en todas las escuelas públicas y privadas. En el sistema penal estaba prohibido como condena por un delito. El castigo corporal estaba también prohibido en las instituciones de acogimiento residencial y

en el acogimiento familiar organizado por las autoridades locales o por organizaciones de voluntarios, pero seguía siendo legal en el ámbito del acogimiento familiar privado<sup>130</sup>.

65. World Vision (WVUK) dijo que, si bien los ciudadanos y residentes británicos eran enjuiciados en el Reino Unido por la explotación y los malos tratos cometidos contra niños en el extranjero, la tasa de fallos condenatorios era baja<sup>131</sup>.

66. UKJCW dijo que el Gobierno del Reino Unido había hecho pocos progresos con respecto a la creación de una estrategia coordinada entre las cuatro naciones sobre la violencia contra la mujer<sup>132</sup>.

67. El CPT-CoE formuló recomendaciones con respecto a la detención y el encarcelamiento de personas que incluían la entrega a los detenidos de sus derechos por escrito<sup>133</sup>.

68. Women in Prison (WIP) dijo que la falta de ropa adecuada para las mujeres presas en algunas cárceles vulneraba su derecho a la dignidad<sup>134</sup>. Howard League for Penal Reform (HLPR) dijo que el servicio penitenciario no atendía a las necesidades de las mujeres vulnerables<sup>135</sup>.

69. BIRW dijo, en relación con Irlanda del Norte, que la separación entre los presos paramilitares y los demás presos en la cárcel de Maghaberry restringía el acceso a las instalaciones<sup>136</sup>. Además, no había una cárcel para mujeres<sup>137</sup>.

70. El Scottish Consortium for Learning Disability (SCLD) dijo que no se podía acceder a muchos de los programas destinados a fomentar la rehabilitación y la libertad condicional de los presos con problemas de aprendizaje<sup>138</sup>.

71. El Poppy Project (PP) dijo que no existía un marco jurídico independiente para el reconocimiento o la protección de las víctimas de trata y se utilizaba excesivamente el sistema de asilo para informar la toma de decisiones sobre la trata<sup>139</sup>.

72. ASI dijo que el Mecanismo Nacional de Derivación (NRM)<sup>140</sup> era la estructura oficial que se utilizaba para identificar a las víctimas de trata de personas. El NRM era deficiente; entre otras cosas, se basaba excesivamente en la discreción de los funcionarios, que tenían una formación mínima<sup>141</sup>.

73. La ODVV dijo que la atención a las mujeres adultas víctimas de trata con fines de explotación sexual se proporcionaba a las víctimas que cumplían determinados criterios. Por lo tanto, no todas las víctimas que necesitaban esa atención la recibían<sup>142</sup>.

### **3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado de derecho**

74. BIRW dijo que el Reino Unido no había creado un mecanismo para abordar las consecuencias del conflicto en Irlanda del Norte, a pesar de la recomendación formulada en ese sentido por el Grupo Consultivo sobre el Pasado<sup>143</sup>.

75. BIRW dijo que los agentes del Gobierno del Reino Unido habían actuado en connivencia con paramilitares republicanos y lealistas durante todo el conflicto en Irlanda del Norte, y que había existido una connivencia de ese tipo en el asesinato de Patrick Finucane. Sin embargo, a pesar del Acuerdo de Weston Park<sup>144</sup> de 2001 y de la recomendación formulada por el magistrado jubilado de la Corte Suprema del Canadá Peter Cory, no se había abierto ninguna investigación<sup>145</sup>.

76. La Scottish Campaign against Irresponsible Drivers (SCID) dijo que las víctimas de accidentes de circulación que habían resultado heridas como consecuencia de la conducción criminal de otra persona no eran reconocidas como víctimas de un delito<sup>146</sup>.



77. La ECRI-CoE recomendó que se capacitara al personal del sistema de justicia penal sobre la prohibición de las conductas de odio racial o religioso en Irlanda del Norte<sup>147</sup>.

78. Justice dijo que el procedimiento penal de Escocia permitía al detenido tener acceso a un representante legal durante su detención policial. Sin embargo, en Inglaterra y Gales, el acceso del detenido a un representante legal se dejaba a la discreción de los agentes de policía<sup>148</sup>.

79. La HLPR dijo que, a pesar del anuncio de que se aboliría la pena de prisión para garantizar la protección del público, el gran número de personas que cumplían una pena de prisión indefinida seguirían encarceladas indefinidamente hasta que el servicio penitenciario pudiera proporcionarles los cursos necesarios para determinar la idoneidad de su puesta en libertad<sup>149</sup>.

80. La LS dijo que las denuncias de que algunos miembros de la abogacía habían sido objeto de escuchas telefónicas y de vigilancia por parte de algunos periódicos debían ser examinadas por la Comisión de Investigación Leveson<sup>150</sup>, ya que esas prácticas podrían haberse llevado a cabo con la intención de socavar las actuaciones judiciales y podrían haber constituido un intento de obstruir el curso de la justicia<sup>151</sup>.

81. El CCW pidió que se reorientara el sistema de justicia juvenil para, entre otras cosas, evitar la criminalización de los niños y respetar los derechos de los niños privados de libertad<sup>152</sup>. La JS 7 dijo que el personal de los cuatro centros de formación de régimen cerrado<sup>153</sup>, que eran privados, no estaba bien capacitado<sup>154</sup>. La HLPR expresó su preocupación por la aplicación de medidas de coerción, incomunicación y registros forzados a los niños privados de libertad<sup>155</sup>. La OCC dijo que se utilizaban técnicas de coerción dolorosas a pesar del riesgo de causar daños graves a los niños<sup>156</sup>.

82. BIRW dijo que los servicios de inteligencia del Reino Unido operaban en secreto y no estaban sujetos a ningún tipo de supervisión pública, y que sus agentes no tenían que rendir cuentas de sus actos<sup>157</sup>.

83. HRCS dijo que el Parlamento de Escocia le había prohibido prestar asistencia en los casos de derechos humanos<sup>158</sup>.

84. WIP dijo que las mujeres eran objeto de discriminación y desigualdad en el sistema de justicia penal y que el Reino Unido no había tomado medidas apreciables para aplicar una perspectiva de género en el sistema de justicia penal<sup>159</sup>.

#### **4. Derecho a la intimidad**

85. La Scottish Transgender Alliance (STA) dijo la Ley de reconocimiento del género de 2004 impedía a las personas intersexo acceder al reconocimiento legal de su género<sup>160</sup>.

86. La Islamic Human Rights Commission (IHRC) dijo que la introducción de escáneres corporales en los aeropuertos de Heathrow y Manchester violaba el derecho a la intimidad<sup>161</sup>.

#### **5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política**

87. Odyssey Trust (OT) dijo que los delitos de *common law* de blasfemia y difamación blasfema, que se habían abolido en Inglaterra y Gales, todavía existían en Irlanda del Norte<sup>162</sup>.

88. English PEN (PEN) dijo que las leyes de difamación vigentes en Inglaterra y Gales infringían de forma significativa la libertad de expresión y desalentaban el periodismo de investigación legítimo<sup>163</sup>.

89. Article 19 dijo que la Ley de la economía digital de 2010 obligaba a los proveedores de servicios de Internet a, entre otras cosas, tomar medidas contra los abonados sin un proceso judicial<sup>164</sup>, y Nominet, el registro de nombres de dominio, estaba considerando la posibilidad de bloquear nombres de dominio a petición de la policía, sin una orden judicial<sup>165</sup>.

90. Article 19 dijo que la Ley de secretos oficiales se utilizaba con frecuencia para silenciar a los denunciantes de irregularidades en la administración pública<sup>166</sup>.

91. Engender<sup>167</sup> dijo que no había mecanismos para mejorar el acceso de las mujeres a los puestos de poder, participación y toma de decisiones. Recomendó, entre otras cosas, que se establecieran cupos obligatorios para la selección de los candidatos<sup>168</sup>.

## 6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

92. La Joseph Rowntree Foundation (JRF) dijo que el desconocimiento de sus derechos laborales, entre otros factores, exponía a los trabajadores migratorios a la explotación<sup>169</sup>.

93. El IHRB dijo que el Organismo de concesión de licencias a empresarios de mano de obra, que había protegido eficazmente los derechos de los trabajadores vulnerables en los cinco sectores en que tenía competencias, podría ser objeto de grandes recortes de financiación o de cierre<sup>170</sup>.

94. Kalayaan dijo que el personal doméstico de los hogares de diplomáticos sufría el mismo grado de malos tratos que el de los hogares particulares y que la probabilidad de que hubieran sido víctimas de trata era 20 veces mayor<sup>171</sup>.

95. Kalayaan dijo que, pese a que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido como buena práctica el visado para los trabajadores domésticos en hogares particulares<sup>172</sup>, el Reino Unido había propuesto poner fin a la emisión de dicho visado o modificarlo. Kalayaan pidió que se mantuviera el visado y se hiciera extensivo a los trabajadores domésticos en hogares de diplomáticos<sup>173</sup>.

96. El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (ECSR-CoE) llegó a la conclusión de que el Reino Unido no cumplía la Carta Social Europea porque, entre otras razones, no disponía de garantías suficientes para impedir las jornadas de trabajo de más de 12 horas<sup>174</sup>.

## 7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

97. El CCW se refirió la recomendación 16<sup>175</sup> y dijo que no se había cumplido el compromiso asumido de reducir la pobreza infantil a la mitad para el año 2010<sup>176</sup>. Pidió que se asignaran recursos suficientes para combatir la pobreza infantil<sup>177</sup>.

98. La JS 8 dijo que en la Estrategia de reducción de la pobreza infantil no se reconocían claramente las presiones económicas a que estaban sometidas las familias ni las consecuencias de dichas presiones para los hijos<sup>178</sup>.

99. La JS 8 dijo que la aprobación, en Gales, de la Medida para los niños y las familias reflejaba en una ley el compromiso de erradicar la pobreza infantil<sup>179</sup>. El CCW dijo que muchos de los elementos que afectaban la pobreza infantil no eran competencia de la Asamblea Nacional de Gales<sup>180</sup>.

100. Engender dijo que la Estrategia de reducción de la pobreza infantil en Escocia<sup>181</sup> no se había materializado en planes concretos para sacar a los niños de la pobreza abordando directamente la pobreza de su madre<sup>182</sup>.

## 8. Derecho a la salud

101. La JS 6 dijo que la legislación de Irlanda del Norte relativa al aborto obstaculizaba la efectividad del derecho de las mujeres al más alto nivel posible de salud física y mental<sup>183</sup>.

102. La JS 10 dijo que los servicios especializados para niños y adolescentes con problemas de salud mental en Escocia no eran adecuados<sup>184</sup>.

103. SCFS expresó su preocupación por el uso de medicamentos químicos sedativos para tratar a niños con trastornos como el déficit de atención e hiperactividad y a adultos en régimen de atención residencial<sup>185</sup>.

104. AdEd Knowledge Company LLP (AKC) dijo que, aunque no estaba permitido administrar medicamentos neurolépticos a los enfermos de demencia, su uso era sistemático en las residencias de ancianos, a pesar del mayor riesgo de muerte<sup>186</sup>.

105. Age UK (AU) dijo que los ancianos no siempre recibían alimentos y bebidas adecuados ni la ayuda necesaria para comer en los hospitales y residencias de ancianos<sup>187</sup>.

106. La Scottish Transgender Alliance (STA) dijo que las personas intersexo no podían estar seguras de que sus derechos fueran debidamente respetados por los profesionales de la medicina, ya que no existían protocolos de atención de la salud de esas personas basados en sus derechos<sup>188</sup>.

## 9. Derecho a la educación

107. SC dijo que la situación socioeconómica de la familia afectaba el aprendizaje temprano. Los niños que vivían en la pobreza tenían peores resultados que los demás<sup>189</sup>.

108. La JS 10 dijo que en Escocia no se daba apoyo a los niños con discapacidad para que, entre otras cosas, se integraran en el sistema de educación ordinario<sup>190</sup>.

109. SCFS dijo que el Gobierno de Escocia debía velar por que los maestros estuvieran plenamente capacitados para dar más apoyo a los niños con dificultades de aprendizaje y trastornos del espectro autista<sup>191</sup>.

110. SCFS dijo que debía darse a los niños sordos la oportunidad de aprender y utilizar el lenguaje de signos británico en la escuela<sup>192</sup>.

111. La JS 13 dijo que el Proyecto sobre los derechos humanos en las escuelas, realizado en colaboración con el Ministerio de Justicia, había sido abandonado en 2009 por falta de fondos<sup>193</sup>.

112. SexYOUality (SY) dijo que los maestros no habían recibido la formación adecuada para responder al hostigamiento contra los homosexuales en las escuelas<sup>194</sup>.

113. La CRAE dijo que se estaba produciendo una erosión de los derechos civiles en las escuelas. La Ley de educación de 2011, por ejemplo, facultaba al personal para revisar y borrar la información de los teléfonos y las computadoras portátiles de los alumnos<sup>195</sup>.

114. La CRAE dijo que la Convención sobre los Derechos del Niño debía incluirse en el plan de estudios nacional obligatorio<sup>196</sup>.

## 10. Personas con discapacidad

115. La JS 9 dijo que el nuevo sistema de crédito universal podría reducir significativamente el apoyo prestado a los niños con discapacidad y a sus familias<sup>197</sup>.

116. El SCLD dijo que los recortes a los "paquetes de ayuda" o al subsidio de subsistencia para personas con discapacidad (DLA) limitarían la independencia y la participación de las personas con discapacidad en la comunidad<sup>198</sup>.

117. SCFS dijo que, a pesar de los logros alcanzados por el Gobierno de Escocia, los derechos de las personas con discapacidad se verían erosionados por el programa de reformas del sistema de bienestar del Gobierno del Reino Unido, motivado por los recortes presupuestarios<sup>199</sup>.

118. La Scottish Association for Mental Health (SAMH) dijo que, en Escocia, las mujeres con problemas de salud mental estaban desproporcionadamente representadas en el sistema de justicia penal<sup>200</sup> y que las personas con problemas de salud mental eran objeto de marginación y discriminación<sup>201</sup>.

119. La JS 13 recomendó que el Gobierno del Reino Unido priorizara y abordara la falta de comprensión de los delitos motivados por prejuicios por parte de la policía, en la medida en que se cometían contra personas con discapacidad<sup>202</sup>.

120. Disability Politics UK (DP) dijo que permitir a los parlamentarios trabajar en jornada parcial permitiría a las personas con discapacidad ser parlamentarios<sup>203</sup>. Se había presentado una propuesta en ese sentido al Ministro para las Personas con Discapacidad<sup>204</sup>.

121. El SCLD dijo, entre otras cosas, que la falta de inodoros de tipo "Changing Places" en las zonas públicas de Escocia<sup>205</sup> restringía la participación de las personas con discapacidad en su comunidad y en la sociedad<sup>206</sup>.

122. Mencap dijo que las garantías ofrecidas por el Reino Unido de que haría efectivos los derechos de las personas con dificultades de aprendizaje profundas y múltiples no se habían traducido en mejoras visibles<sup>207</sup>.

123. SCFS expresó su preocupación por el hecho de que se estuviera aconsejando a las mujeres que abortaran cuando se les diagnosticaba una discapacidad del feto aunque existiera la posibilidad de que esos niños tuvieran una buena calidad de vida<sup>208</sup>.

## 11. Minorías y pueblos indígenas

124. Lead Gate (LG) dijo que los gitanos y los nómadas irlandeses seguían siendo dos de las comunidades más desfavorecidas, entre otras cosas por la falta de reconocimiento jurídico de su modo de vida tradicional<sup>209</sup>. La National Federation of Gypsy Liaison Groups (NFGLG) dijo que la "ley de planificación" debía reconocer los derechos de los nómadas tradicionales<sup>210</sup>.

125. René Cassin (RC) pidió que se establecieran sitios culturalmente apropiados para los gitanos y los nómadas irlandeses y que se reestableciera el deber de las autoridades locales de proporcionar dichos sitios<sup>211</sup>.

126. La JS 8 dijo que el Gobierno de Gales había publicado el documento titulado "Travelling to a Better Future – a Framework for Action" para hacer frente a las desigualdades y la exclusión social de los gitanos y los nómadas<sup>212</sup>. AKC recomendó que se aprobara una política similar en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte<sup>213</sup>.

127. Article 12 in Scotland (Article 12) dijo que algunos medios de comunicación criminalizaban deliberadamente a las comunidades gitanas/romaníes/nómadas<sup>214</sup>.

128. El Irish Traveller Movement in Britain (ITMB) dijo que las medidas educativas adoptadas por el Gobierno del Reino Unido tendrían un efecto negativo en los alumnos gitanos y nómadas<sup>215</sup>.

## 12. Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo

129. La JS 1 dijo que desde el último examen se había producido un aumento significativo en la detención de adultos por su condición de inmigrantes<sup>216</sup>.

130. El Gatwick Detainees Welfare Group (GDWF) dijo que el sistema de detención de inmigrantes era esencialmente deficiente, pues el Organismo de Fronteras del Reino Unido (UKBA) tomaba decisiones incorrectas e ilícitas<sup>217</sup>. La JS 3 dijo que esas decisiones se basaban en pruebas de "credibilidad" previsibles y poco elaboradas<sup>218</sup>. Christian Solidarity Worldwide (CSW) dijo que la carga de demostrar un temor fundado de persecución y de demostrar su credibilidad recaía en los solicitantes de asilo<sup>219</sup>.

131. La Scottish Transgender Alliance (STA) dijo que el proceso de asilo no defendía los derechos de los solicitantes de asilo de la comunidad LGBT<sup>220</sup>. La National Coalition of Anti-Deportation Campaigns (NCADC) dijo que las razones para la denegación de las solicitudes de asilo de personas de la comunidad LGBT reflejaban homofobia y una cultura de incredulidad<sup>221</sup>.

132. La OCC se refirió a la recomendación 25 y dijo que, aunque se había cerrado el centro de reclusión de niños inmigrantes de Yarl's Wood, se seguía reclusando a los niños que se encontraban en espera de expulsión o retorno<sup>222</sup>.

133. La JS 1 dijo que se detenía sistemáticamente<sup>223</sup> a los adultos vulnerables<sup>224</sup>. La modificación de las directrices operacionales del UKBA realizada en agosto de 2010 había introducido la detención por defecto de las personas vulnerables, siempre que pudiera hacerse cargo adecuadamente de su vulnerabilidad específica<sup>225</sup>.

134. El Comisario-CoE señaló la falta de un marco jurídico preciso para el proceso de detención y determinación acelerada del asilo (Detention Fast Track) (DFT) y recomendó que la legislación fuera compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos<sup>226</sup>.

135. Detention Action (DA) dijo que el proceso DFT se había creado para las solicitudes de asilo "claras"<sup>227</sup>. FT dijo que había muchos problemas con el proceso DFT, por ejemplo en la selección de los casos en que procedía aplicarlo<sup>228</sup>. Yarl's Wood Befrienders (YWB) dijo que el proceso DFT se utilizaba de forma inadecuada en los casos complejos de mujeres<sup>229</sup>.

136. La JS 10 dijo que, aunque las nuevas directrices para los trabajadores sociales del UKBA<sup>230</sup> contenían, entre otras cosas, referencias a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, esos principios aún no se habían llevado a la práctica<sup>231</sup>.

137. La JS 3 dijo que los drásticos recortes a la asistencia jurídica entrañaban que los solicitantes de asilo tenían que tratar con los funcionarios y abogados del Ministerio del Interior y con los jueces del tribunal sin representación ni asesoramiento<sup>232</sup>.

138. Sahir House (SH) dijo que el Reino Unido utilizaba la indigencia como criterio para expulsar o devolver forzosamente a los solicitantes de asilo a su país de origen<sup>233</sup>. Stillhumanstillhere (SHSH) pidió que se adoptaran medidas, entre ellas la concesión de un permiso de trabajo a los solicitantes de asilo<sup>234</sup>.

139. Equal Rights Trust (ERT) dijo que no existía ningún mecanismo para identificar a los apátridas<sup>235</sup>.

## 13. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

140. AI se refirió a la recomendación 6<sup>236</sup> y dijo que, a pesar de la revisión realizada, la legislación y la política de lucha contra el terrorismo no respetaban los derechos humanos<sup>237</sup>.

141. La JS 12 dijo que las enmiendas a la Ley de lucha contra el terrorismo de 2000 no eran suficientes para asegurar el cumplimiento de las normas de derechos humanos<sup>238</sup>. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa de *Gillan y Quinton*<sup>239</sup>, se había suspendido la práctica de parar y registrar a personas en la calle sin una sospecha razonable, prevista en el artículo 44<sup>240</sup>. Sin embargo, el artículo 47 a) del Decreto de enmienda de la Ley de lucha contra el terrorismo de 2000, de 2011, permitía a la policía seguir parando y registrando a personas en la calle sin una sospecha razonable, siempre que la persona cumpliera determinados criterios<sup>241</sup>. Los agentes examinadores en los puertos y aeropuertos también estaban facultados para parar, interrogar y/o detener a personas sin una sospecha razonable<sup>242</sup>.

142. La JS 12 dijo que los agentes autorizados solían parar y registrar a las personas por sus perfiles étnicos<sup>243</sup>. La IHRC dijo que la policía se centraba en las personas que consideraba musulmanas<sup>244</sup>. La ECRI-CoE señaló que la práctica de parar y registrar afectaba de manera desproporcionada a los miembros de las comunidades negra y minoritarias<sup>245</sup>.

143. AI dijo que el programa de expulsión con salvaguardias permitía devolver a sospechosos de actos de terrorismo a Estados que practicaban la tortura. Las garantías ofrecidas por esos Estados no podían eliminar los riesgos reales de tortura<sup>246</sup>. Redress dijo que la vigilancia después de la expulsión no era una salvaguardia suficiente<sup>247</sup>.

144. AI dijo que la duración de la detención preventiva de los sospechosos de delitos de terrorismo era aún muy larga, a pesar de su reducción de 28 a 14 días<sup>248</sup>.

145. El CPT-CoE dijo que las personas detenidas en virtud de la legislación de lucha contra el terrorismo debían comparecer personalmente ante un juez cuando se pidiera una prórroga de su detención, en lugar de la audiencia que se llevaba a cabo mediante una conexión de vídeo<sup>249</sup>.

#### 14. Situación existente en determinadas regiones o territorios o relacionada con ellos

146. El CPT-CoE formuló observaciones y recomendaciones sobre cuestiones que incluían la detención y el tratamiento de los detenidos y presos en la Bailía de Guernsey y la Bailía de Jersey<sup>250</sup>.

#### Notas

<sup>1</sup> The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all original submissions are available at: [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org). (One asterisk denotes a national human rights institution with "A" status).

<sup>2</sup> NIHRC stated that it reviewed the adequacy and effectiveness of measures undertaken by the Government of the United Kingdom and Northern Ireland Executive to promote and protect human rights, specifically within Northern Ireland. (NIHRC, p. 1, para. 1).

<sup>3</sup> United Nations General Assembly, Human Rights Council, Eighth session, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, U.N. Doc. A/HRC/8/25, 23 May 2008 (A/HRC/8/25), para. 56.

<sup>4</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>5</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>6</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>7</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>8</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>9</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>10</sup> The declaration attached to art. 1 of the OP-CRC on Involvement of Children in Armed Conflict reads:

“The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland will take all feasible measures to ensure that members of its armed forces who have not attained the age of 18 years do not take a direct part in hostilities.

The United Kingdom understands that article 1 of the Optional Protocol would not exclude the deployment of members of its armed forces under the age of 18 to take a direct part in hostilities where:

- a) there is a genuine military need to deploy their unit or ship to an area in which hostilities are taking place; and
- b) by reason of the nature and urgency of the situation:-
  - i) it is not practicable to withdraw such persons before deployment; or
  - ii) to do so would undermine the operational effectiveness of their ship or unit, and thereby put at risk the successful completion of the military mission and/or the safety of other personnel.” (See NIHRC, p. 1, para. 7, fn. 9)

- <sup>11</sup> The interpretative declaration states, “[T]he United Kingdom wishes to state its understanding of certain articles in the Convention. It interprets article 4 as requiring a party to the Convention to adopt further legislative measures in the fields covered by sub-paragraphs (a), (b) and (c) of that article only in so far as it may consider with due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of the Convention (in particular the right to freedom of opinion and expression and the right to freedom of peaceful assembly and association) that some legislative addition to or variation of existing law and practice in those fields is necessary for the attainment of the end specified in the earlier part of article 4” (See NIHRC, p. 2, para.117, fn. 13).
- <sup>12</sup> NIHRC, pp. 1-2, paras. 7-14; See also EHRC, p. 1, para. 1; EHRC, p. 2, para. 2; EHRC made recommendations (p. 2, para. 2); SHRC, p. 2, para. 4.
- <sup>13</sup> NIHRC, pp. 1-2, paras. 7-14; See also EHRC, p. 1, para. 1; EHRC, p. 2, para. 2; EHRC made recommendations (p. 2, para. 2); SHRC, p. 2, para. 4.
- <sup>14</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>15</sup> NIHRC, p. 1, para. 6.
- <sup>16</sup> SHRC, pp. 2-3, paras. 7, 8.
- <sup>17</sup> “This submission includes the EHRC independent assessment of human rights in England, Wales and Scotland” (See EHRC, Cover Page).
- <sup>18</sup> EHRC, p. 2, para. 5.
- <sup>19</sup> EHRC, p. 3, para. 7; EHRC made recommendations (p. 3, para. 7).
- <sup>20</sup> SHRC, p. 4, para. 9.
- <sup>21</sup> (A/HRC/8/25), para. 56.
- <sup>22</sup> NIHRC, p. 4, para. 28.
- <sup>23</sup> NIHRC, p. 4, para. 30.
- <sup>24</sup> NIHRC, p. 4 para. 29; EHRC, p. 5, para. 10; EHRC made recommendations (p. 5, para. 10); CoE-CPT, CPT/Inf (2009) 30, p. 39, para. 79.
- <sup>25</sup> EHRC, p. 6, para. 12; EHRC made a recommendation (p. 6, para. 12).
- <sup>26</sup> EHRC, p. 6, para. 12; EHRC made recommendations (p. 6, para. 12); See also SHRC, p. 7, paras. 24, 25. SHRC made a recommendation (p. 7, para. 25).
- <sup>27</sup> EHRC, p. 7, para. 14; EHRC made a recommendation (p. 7, para. 14) See also AU, p. 6, paras. 7.1, 7.2.
- <sup>28</sup> EHRC, p. 8, para. 14. EHRC made a recommendation (p. 8, para. 14); See also CRAE, p. 4, para. 22; JS 9, p. 8, para. 34; Justice, p. 5, para. 26; JWY, p. 4. JWY stated that according to the Government’s Equality Impact Assessment, the cuts in legal aid will potentially impact a greater proportion of women, Black, Asian and minority ethnic people, as well as ill or disabled people (p. 4).
- <sup>29</sup> EHRC, p. 9, para. 17; See also JS 13, p. 10, para. 36; Justice, p. 4, paras. 20-23.
- <sup>30</sup> EHRC, p. 9, para. 18.
- <sup>31</sup> EHRC, p. 9, para. 19; EHRC made a recommendation (p. 9, para. 19).
- <sup>32</sup> SHRC, p. 8, para. 29. SHRC made a recommendation (p. 8, para. 29).
- <sup>33</sup> EHRC, p. 11, para. 24. EHRC made recommendations. (p. 11, para. 24).
- <sup>34</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>35</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>36</sup> World Programme for Human Rights Education, established by the United Nations General Assembly’s resolution 59/113 (10 December 2004). The first phase (2005-2009) focused on human

rights education in the primary and secondary school systems. The second phase (2010-2014) focuses on human rights education for higher education and on human rights training programmes for teachers and educators, civil servants, law enforcement officials and military personnel (NIHRC, p. 2, para. 15, fn. 25).

<sup>37</sup> NIHRC, p. 2, para. 15.

<sup>38</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>39</sup> NIHRC, p. 2, paras. 18, 19.

<sup>40</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>41</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>42</sup> NIHRC, p. 3, para. 24; See also AI, p. 4; Redress, p. 4, para. 8; Justice, p. 4, para. 15.

<sup>43</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>44</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>45</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>46</sup> NIHRC, p. 3, para. 27.

<sup>47</sup> SHRC, p. 7, para. 23. SHRC made a recommendation (p. 7, para. 23).

<sup>48</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>49</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>50</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>51</sup> NIHRC, p. 4, para. 32.

<sup>52</sup> NIHRC, p. 4, para. 35.

<sup>53</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>54</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>55</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>56</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>57</sup> NIHRC, p. 5, para. 37.

<sup>58</sup> A/HRC/8/25, para. 56.

<sup>59</sup> NIHRC, p. 5, paras. 42-44.

<sup>60</sup> SHRC, p. 6, para. 16.

<sup>61</sup> The following abbreviations have been used for this document:

ICERD	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR	Optional Protocol to ICESCR
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1	Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2	Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
OP-CEDAW	Optional Protocol to CEDAW
CAT	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT	Optional Protocol to CAT
CRC	Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC	Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
OP-CRC-SC	Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child pornography
ICRMW	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
CPED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD	Optional Protocol to CRPD
CED	International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
UDHR	Universal Declaration of Human Rights



- <sup>62</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>63</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>64</sup> JS 10, p. 2, para. 4.
- <sup>65</sup> SC, p. 2, para. 5. SC made a recommendation, p. 2, para. 6.
- <sup>66</sup> CSI, p. 2, paras. 4, 5, and p. 3, para. 12. CSI made recommendations (p. 3); See also OCC, p. 4, para. 2.13, JS 13, p. 1, para. 6; JS 13, P. 1, para. 6; WVUK, p. 4, para. 3.1.1; CPTI, pp. 2-3, paras. 18-21.
- <sup>67</sup> JS 9, p. 2, paras. 4-7. JS 9 made a recommendation (p. 3); See also CRAE, p. 6, para. 31.
- <sup>68</sup> JS 6, pp. 3-4, paras. 4, 11.
- <sup>69</sup> Redress, 7, para. 20. Redress made recommendations (p. 7).
- <sup>70</sup> CRAE reported on the state of children's rights in England (CRAE, p. 19).
- <sup>71</sup> See also JS 13, p. 1, para. 6; JS 7, p. 7.
- <sup>72</sup> CRAE, p. 11, para. 55.
- <sup>73</sup> JS 13, p. 1, para. 6.
- <sup>74</sup> JS 12 stated that this Act provided an exceptional response to anticipated violence and allowed for police to search any person or vehicle for weapons in an area where serious violence is reasonably anticipated (p. 6, para. 26).
- <sup>75</sup> JS 12, p. 6, para. 26.
- <sup>76</sup> CoE-ECRI, CRI (2010) 4, p. 11, paras. 1-3.
- <sup>77</sup> JS8, p. 2, para. 3; JS 10, p. 3, para. 8.
- <sup>78</sup> JS 8, p. 4, para. 12, 16; See also SC, p. 2, para. 9.
- <sup>79</sup> JS 9, p. 2, para. 8.
- <sup>80</sup> JS 8, pp. 4-5, paras. 17-20; See also CCW, p. 3, para. 3.3.2; SC p. 2, para. 10.
- <sup>81</sup> JS 10, p. 4, para. 11. JS 10 made recommendations (p. 4). See also SC p. 3, para. 13.
- <sup>82</sup> CPTI, p. 4, para. 17.
- <sup>83</sup> AI, p. 2.
- <sup>84</sup> AI, p. 2.
- <sup>85</sup> FT, p. 2, para. 4.
- <sup>86</sup> JS 8, p. 3, para. 5. JS 8 made recommendations (p. 3); JS 10, p. 2, para. 5. JS 10 made recommendations (p. 3); JWY, p. 1; CCW, p. 2, paras. 3.1.2 - 3.1.6; SC p. 4, para. 19; JS 9, p. 5, para. 19. JS 9 made recommendations (p. 5); RC, pp. 3- 4, paras. 3-9. RC made recommendations (p. 3); LS, p. 5, paras. 24, 25; JS 13, p. 5, para. 18.
- <sup>87</sup> LS, p. 5, paras. 24, 25; See also SHRC, pp. 2-3, para. 5.
- <sup>88</sup> JS 13, p. 5, para. 18.
- <sup>89</sup> The OCC stated that it's "submission will focus upon children's rights in England and, in relation to non-devolved issues, other relevant parts of the United Kingdom" (p. 2, para. 1.1).
- <sup>90</sup> OCC, p. 2, para. 2.29.
- <sup>91</sup> JS 14 stated that the The Belfast (Good Friday) of 1998 was signed by the Irish and United Kingdom governments along with Northern Ireland political parties (p. 4, para. 2).
- <sup>92</sup> CAJ, p. 4, para. 3; JS 13, p. 2, para. 2.
- <sup>93</sup> BIRW, p. 5, para. 14, AI, p. 2.
- <sup>94</sup> SC, p. 4, para. 13; See also JS 8, p. 5, paras. 23, 24. JS 8 made recommendations (p. 6.); JS 10, pp. 4-5, para. 5.
- <sup>95</sup> CCW, p. 4, paras. 3.4.2-3.4.4.
- <sup>96</sup> OCC, p. 3, para. 2.9.
- <sup>97</sup> JS 8, pp. 7-8, paras. 33-36. JS 8 made a recommendation (p. 8).
- <sup>98</sup> AI, p. 2; See also IHRB, p. 4.
- <sup>99</sup> IHRB, pp. 2-3; IHRB made recommendations (pp. 4-5).
- <sup>100</sup> JS 11, pp. 4-5, paras. 6-10.
- <sup>101</sup> The following abbreviation have been used for this document:  
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities
- <sup>102</sup> JS 9, p. 2, para. 7.
- <sup>103</sup> CoE-ECRI, CRI (2010) 4, p. 8.
- <sup>104</sup> JS 13, p. 11, paras. 40, 41.
- <sup>105</sup> JS 9, p. 4, paras. 14, 17.
- <sup>106</sup> CCW, p. 3, paras. 3.2.2 - 3.2.3; See also OCC, p. 2, para. 2.3. OCC made a recommendation (p. 2, para. 2.3); CRAE, p. 5, para. 24).
- <sup>107</sup> AMIS, p. 9.

- <sup>108</sup> UKJCW, p. 3.
- <sup>109</sup> JS 5, p. 2, paras. 6, 11.
- <sup>110</sup> JS 5, p. 1, paras. 4, 5. JS 5 made recommendations. (pp. 4-5, paras. 21-24). JS 5 stated that United Nations bodies have on a number of occasions addressed the issue of caste discrimination, calling for the United Kingdom to prohibit such discrimination through legislation. (pp. 2-3, paras. 12-17).
- <sup>111</sup> ODVV, para. 19. ODVV made recommendations (paras. 29, 30).
- <sup>112</sup> JS 7, p. 6; JS 7 raised additional concerns (p. 7); See also Redress, p. 3, para. 14; FT p. 3, para. 8. FT made a recommendations, p. 3, paras. 9, 11.
- <sup>113</sup> REDRESS referred to “Consolidated Guidance to Intelligence Officers and Service Personnel on the Detention and Interviewing of Detainees Overseas, and on the Passing and Receipt of Intelligence Relating to Detainees.” (p. 3, para. 6).
- <sup>114</sup> Redress, p. 3, paras. 6, 7. Redress made recommendations (p. 7).
- <sup>115</sup> Redress, p. 5, para. 13.
- <sup>116</sup> Redress, p. 6, para. 17.
- <sup>117</sup> BIRW, p. 4, para. 13.
- <sup>118</sup> CoE-CPT, CPT/Inf (2009) 30, p. 15, para. 12.
- <sup>119</sup> AMIS, p. 3.
- <sup>120</sup> AMIS, p. 5.
- <sup>121</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>122</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>123</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>124</sup> A/HRC/8/25, para. 56.
- <sup>125</sup> United Nations General Assembly, Human Rights Council, Eighth session, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, U.N. Doc. A/HRC/8/25, 23 May 2008 (Review).
- <sup>126</sup> GIEACPC, p. 2, paras. 1.1-1.3.
- <sup>127</sup> GIEACPC, p. 2, para. 2.1.
- <sup>128</sup> CoE-Comm, CommDH(2008)28, p. 1, CoE-Comm made a recommendation (p. 12, para. 53).
- <sup>129</sup> JS 8, pp. 11- 12, paras. 53-58. JS 8 made recommendations (p. 12); JS 10, p. 6, paras. 16-18. JS 10 made a recommendation (p. 6).
- <sup>130</sup> GIEACPC, p. 3, paras. 2.3, 2.4.
- <sup>131</sup> WVUK, p. 4, paras. 2.3.1, 2.3.2. WVUK made recommendations (p. 5, paras. 3.5.1-3.5.4).
- <sup>132</sup> UKJCW, p. 13. UKJCW made recommendations ( p. 15).
- <sup>133</sup> CoE-CPT, CPT/Inf (2009) 30, p. 16, para. 14.
- <sup>134</sup> WIP, p. 4.
- <sup>135</sup> HLPR, p. 2. HLPR made a recommendation (p. 2).
- <sup>136</sup> BIRW, p. 3, para. 9.
- <sup>137</sup> BIRW, p. 3, para. 9.
- <sup>138</sup> SCLD, p. 8, para. 14.
- <sup>139</sup> PP, p. 4, para. 15. PP cited examples of cases where violence against women has been dealt with inappropriately in both systems (pp. 4-5). PP made recommendations (pp. 5-6). PP stated that the NRM was a creature of policy (p. 2).
- <sup>140</sup> ASI, p. 2.
- <sup>142</sup> ODVV, para. 8. ODVV made recommendations (paras. 25 - 28). ODVV stated that the conditions for care and protection were that that victims must be over the age of 18; involved in prostitution within 3 months of referral; willing to cooperate in the prosecution of their traffickers; and must have been trafficked into the United Kingdom from abroad (para. 8).
- <sup>143</sup> BIRW p. 1, para. 1.
- <sup>144</sup> BIRW stated that in 2001 the UK and Irish governments agreed in the Weston Park Agreement to ask an international judicial figure to study six cases of alleged collusion, including that of Patrick Finucane and agreed that, if this person recommended a public inquiry, an inquiry would be held. (BIRW, p. 2, para. 8.)
- <sup>145</sup> BIRW, p. 2, para. 8; See also CAJ p. 6, paras. 8, 9.
- <sup>146</sup> SCID, pp. 1-2.
- <sup>147</sup> CoE-ECRI, CRI (2010) 4, p. 21, paras. 50- 51.
- <sup>148</sup> Justice, p. 2, para. 4.
- <sup>149</sup> HLPR, p. 2.

- 150 LS stated that the Leveson Inquiry is a public inquiry set up by the Prime Minister on 6 July 2011 to look into issues arising from the News International phone hacking scandal (p. 8, para. 51).
- 151 LS, pp.8, 9, paras. 51, 55, 56.
- 152 CCW, p. 6, para. 4.3.5.
- 153 JS 7 referred to Hassockfield, Medway, Oakhill and Rainsbrook (p. 3).
- 154 JS 7, pp. 3-4.
- 155 HLPR, p. 2.
- 156 OCC, p. 8, para. 4.9. OCC made a recommendation (p. 8, para. 4. 9); See also JS 7, p. 4; CRAE, p. 5, para. 50; CCW, p. 6, para. 4.3.4).
- 157 BIRW, p. 5, para. 15.
- 158 HRCS, p. 9.
- 159 WIP, p. 2.
- 160 STA, para. 13. STA made a recommendation (p. 14).
- 161 IHRC, p. 5.
- 162 OT, p. 2, para. 10.
- 163 PEN, para. 6.
- 164 Article 19, para. 5.
- 165 Article 19, para. 7.
- 166 Article 19, paras. 21, 22. Article 19 made recommendations (para. 29).
- 167 Engender stated that it was a women's organisation based in Scotland (p. 1).
- 168 Engender, p. 4.
- 169 JRF, p. 5, para. 6. 2.
- 170 IHRB, p. 3.
- 171 Kalayaan, para. 9.
- 172 Kalayaan referred to "Draft ILO Multilateral Framework on Labour Migration Non binding principles and guidelines for a rights- based approach to labour migration, Geneva, 31 Oct- 2 Nov 2005. Annex II 'Examples of best practise, VI Prevention of and protection against abusive migration practises', pt 82" (para. 14).
- 173 Kalayaan, paras. 27, 29; Kalayaan made other proposals ( paras. 27-30).
- 174 CoE-ECSR, pp. 5-7.
- 175 See CCW, p. 7. The reference to recommendation 11 was in error. From the language used, it was evident that CCW intended to refer to recommendation 16.
- 176 CCW, p. 7; JS 8 stated that there were 3.5 million children growing up in poverty in the United Kingdom (after housing costs) with 1.6 million children living in severe poverty (13% of all children) (p. 8, para. 38); See also OCC, p. 6, para. 4.4; JS 13, p. 10, para. 39; SC, p. 5, paras. 30-37.
- 177 CCW, p. 8.
- 178 JS 8, pp. 8 - 9, paras. 41, 42.
- 179 JS 8, p. 9, para. 46. JS 8 made recommendations (pp. 9-10).
- 180 CCW, p. 7, para. 4.4.4.
- 181 The Scottish Government (2011) Child Poverty Strategy.
- 182 Engender, p. 5, Engender made a recommendation ( p. 5).
- 183 JS 6, p. 5, para. 16. See JS 6, pp. 5-6, paras. 17-19, 24 and 25 for information on the health risks to women. JS 6 made recommendations (paras. 30-33); See also UKJCW, p. 7.
- 184 JS 10, p. 8, paras. 26, 27. JS 10 made a recommendation (p. 8).
- 185 SCFS, p. 13, para. 4.8.5.
- 186 AK, p. 4, para. 4.2.1.
- 187 AU, p. 3, para. 4.1.1.
- 188 STA, para. 8. STA made a recommendation (para. 9).
- 189 SC, p. 6, paras. 39-42.
- 190 JS 10, p. 5, paras. 14, 15. JS 10 stated that training for teachers and support staff in mainstream schools on additional support for learning, equalities and inclusion was inadequate. Only five local authorities provided mandatory training on equalities and inclusion, and none provided mandatory training on specific learning disability topics such as autism or dyslexia. (p. 5, paras. 14, 15). JS 10 made a recommendation (p. 5).
- 191 SCFS, p. 7, para. 4.7.3.
- 192 SCFS, p. 7, para. 4.7.4.
- 193 JS 13, p.10, para. 37.

- 194 SY, p. 1, para. 4. SY made recommendations (p. 2, para. 8).
- 195 CRAE, p. 7, paras. 39, 40.
- 196 CRAE, p. 12, para. 62.
- 197 JS 9, p. 7, para. 31. JS 9 made recommendations (p. 8).
- 198 SCLD, p. 8, para. 15.
- 199 SCFS, p. 3, para. 3.3
- 200 SAMH, p. 4, para. 4.10.
- 201 SAMH, p. 2, para. 3.2.
- 202 JS 13, pp. 8-9, paras. 31-33; See also SCLD, p. 7, para. 13; JS 9, p. 3, para. 12. JS 9 made recommendations (p. 4); CoE-ECRI, p.18, paras. 29.31.
- 203 DP, para. 11.
- 204 DP, paras. 3, 4.
- 205 SCLD stated that this was “[t]his is a toilet which is fully accessible and includes the right equipment as well as enough space for the person and their carers or support workers.” (p. 4, para. 8).
- 206 SCLD, p. 4, para. 8.
- 207 Mencap, p. 6. Mencap made recommendations (pp. 3, 5, 6).
- 208 SCFS, p. 4, para. 4.1.2.
- 209 LG, p. 1. See also CRAE, p. 5, para. 26.
- 210 NFGLG, p. 4. See also CoE-ECRI, CRI (2010) 4, p. 8.
- 211 RC, p. 5, para. 10; See also JS 13, p. 9, para. 13.
- 212 JS 8, p. 10, para. 51. JS 8 made recommendations (p. 11).
- 213 AKC, p. 5, para. 7. c.
- 214 Article 12, paras. 7, 8.
- 215 ITMB, p. 6, para. 3.2; See also CRAE, p. 5, para. 26.
- 216 JS 1, p. 3, para. 3.1.
- 217 GDWF, para. 14. GDWF made recommendations (para. 15); See also AILG who stated that determination of asylum claims from the Bajuni were prejudicial and violated their rights of non-discrimination and equality before the law. ( p. 8, paras. 28, 29). AILG made recommendations (p. 7, paras. 24-27).
- 218 JS 3, para. 8; See also SH, p. 1.
- 219 CSW p. 3, para. 16.
- 220 STA, para. 5, STA made recommendations (paras. 6, 7).
- 221 NCADC, para. 3; See also STA, para. 5).
- 222 OCC, p. 6, para. 4.2; See also JS 1, p. 3, para. 3.3; JS 4, para. 13; JS 7, p. 5, SH, pp. 2-3.
- 223 JS 1 stated that vulnerable adults included people who have survived torture, pregnant women, disabled people, the elderly, those suffering from mental illness or with serious medical conditions. (p. 5, para. 48).
- 224 JS 1, p. 5, para. 4. 8; See also JS 4, para. 8.
- 225 JS 1, pp. 5-6, paras. 4.10-4.13. JS 1 made a recommendation (p. 6, para. 4.15).
- 226 CoE-Commissioner, CommDH(2008)23, p. 6, paras. 21, 24.
- 227 DA, para. 19. DA made recommendations (p. 8); See also RC, p. 6, paras. 12-17).
- 228 FT, p. 4, paras. 15, 16.
- 229 YWB, paras.1-3; See also HRW, p. 4.
- 230 JS 10 p. 9, para. 29. JS 10 referred to “Processing Asylum Applications from a Child, UKBA (2011)”.
- 231 JS 10, p. 9, paras. 29, 30. JS 10 made recommendations (p. 9).
- 232 JS 3, para. 8; See also SH, p. 1; CSW p. 3, para. 15.
- 233 SH, p. 3; See also JS 3, paras. 9, 10, 11; JS 3 made recommendations (paras. 30-36); JS 7, pp. 5-6; FT, p. 4, para. 18; FT made recommendations (p. 4, para. 17).
- 234 SHSH, p. 4, para. 5.2; See also FT, p. 7, paras. 31-34; SH, p. 4.
- 235 ERT, p. 3, para. 7.
- 236 A/HRC/8/25, para. 56.
- 237 AI, p. 3; See also HRA, p. 1; JS 12, p. 3, para. 12.
- 238 JS 12, p. 2, para. 6.
- 239 ECtHR, *Gillan and Quinton v. the United Kingdom*, Application no. 4158/05, judgment of January 12, 2010.
- 240 JS 12, p. 4, paras. 15, 16; See also (BIRW, p. 3, para. 10; HRW, p. 3. HRW made recommendations (p. 5); IHRC, p. 3.

- <sup>241</sup> JS 12, p. 4, para. 12. JS 12 made recommendations (p. 9, para. 30); NIHRC, p. 3, para. 21; NIHRC made recommendations (p. 3, paras. 21, 23).
- <sup>242</sup> JS 12, p. 5, para. 20; JS 12 made recommendations (p. 9, para. 30).
- <sup>243</sup> JS 12, p. 2, para. 6.
- <sup>244</sup> IHRC, p. 4; See also EHRC, p. 4, para. 8; EHRC made recommendations (p. 4, para. 8).
- <sup>245</sup> CoE-ECRI, CRI (2010) 4, p. 8.
- <sup>246</sup> AI, p. 3; See also HRW, p. 1.
- <sup>247</sup> Redress, pp. 4-5, paras. 10, 11. Redress made recommendations (p. 7).
- <sup>248</sup> AI, p. 3; See also HRW, p. 2; JS 7, p. 2; Justice p. 2, para. 3.
- <sup>249</sup> CPT, p. 13, para. 9.
- <sup>250</sup> CoE- CPT : CPT/Inf (2010) 35) ; CPT/Inf (2010) 37.
-